

Documento

POLÍTICO



UN PAÍS
CONTIGO
PODEMOS

PODEMOS

Índice

Objetivo	5
Década perdida y ventana de oportunidad	7
Nacimiento de Podemos y ruptura del bipartidismo	11
Caída de Rajoy y empuje popular	13
Involución o profundización democrática: Gobierno de coalición como oportunidad y contexto internacional	17
Un Gobierno para las mayorías sociales	21
Profundización en el carácter popular de Podemos	23
Espacio plural de las fuerzas del cambio	27
No renunciamos a nuestros sueños: por una república plurinacional y solidaria	29
Anexo 1. Horizonte estratégico tras la crisis del COVID-19	31
Anexo 2. La agenda renovada de la política internacional de Podemos	39

Objetivo

El presente documento está concebido para favorecer un debate en Podemos de cara a nuestra Tercera Asamblea Ciudadana.

Hoy, casi diez años después del 15M, Podemos es un actor determinante en la política española y estamos presentes en el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. El rigor en el diagnóstico, la perseverancia guiada por las ideas y la capacidad de resistencia frente a los ataques y los intentos de fragmentarnos que han demostrado tanto nuestra organización como el movimiento popular del que formamos parte han sido la condición de posibilidad de que ahora esté en nuestra mano demostrar que gobernando se puede frenar la involución democrática, mejorar la vida de la gente y abrir nuevas perspectivas tanto para responder a los retos que abre el siglo XXI como para plantear las utopías con los pies en el suelo que nos ayuden a seguir confiando en la política.

No ha sido un camino fácil, pero hemos conseguido algunos de nuestros principales objetivos a una velocidad asombrosa y hoy podemos decir que gracias a nuestro trabajo, pero, sobre todo, a la valentía y determinación de nuestro pueblo, algunas cosas ya han cambiado para siempre en España. Pero queda mucho por hacer.

Abordamos nuestra Tercera Asamblea Ciudadana en un contexto de tensión aguda entre involución y profundización democrática. En el empuje del proceso de profundización democrática se ubican los sectores políticos y sociales partidarios de encarar reformas profundas en una dirección democrática y popular, mientras que las fuerzas reaccionarias —que se articulan en torno a los intereses de las élites económicas y los buitres financieros— buscan acabar con los consensos democráticos nacidos en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que forman parte de los artículos más avanzados de la Constitución de 1978.

Este documento nace con la voluntad de recapitular todo lo acontecido hasta aquí, y mirar hacia dentro y fuera del partido. Es tiempo de pararnos a pensar y volver la vista atrás, entender cómo hemos llegado hasta aquí para orientar cuál debe ser nuestro papel en este nuevo escenario para impulsar los cambios profundos que España necesita y, a la vez, aportar al impulso del movimiento popular y construir organización reforzando una dirección estratégica que tiene la justicia social como objetivo común y eje de su acción política.

Década perdida y ventana de oportunidad

Podemos nace en un momento en el que el modelo neoliberal en crisis planteaba como solución ahondar en las mismas medidas que expulsaban a millones de personas de la posibilidad de una vida digna, especialmente a los jóvenes a los que expulsaban también de España: recortes de salario, privatización de la educación, privatización de la salud, recortes en pensiones, encarecimiento de las tasas universitarias, desahucios cotidianos, en un contexto, además, de enorme desconfianza ciudadana en el sistema de partidos por los numerosos casos de corrupción que arrastraban al bipartidismo y a los partidos nacionalistas que habían apuntalado ese modelo, así como por culpa de una ley electoral que rompía la proporcionalidad y no dejaba votar a la comunidad en el exterior. Desde la política, desde la academia, desde las instituciones, desde los medios no se daban explicaciones de la crisis, sino que se cargaba en la propia crisis la explicación del vaciamiento democrático que vivíamos.

La crisis de 2008 hizo saltar definitivamente por los aires los consensos sociales que habían articulado el sistema político desde 1978. La aceptación de la monarquía, la impunidad de las élites y el mantenimiento de una oligarquía parasitaria habían tenido como contrapartida la aceptación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales como parte de un sistema político de democracia limitada. La implementación del modelo neoliberal supuso un proceso de depauperación de las condiciones democráticas que tuvo su punto de no retorno con la crisis de 2008.

En ese contexto, y alimentado por las movilizaciones sociales en otros países, en España irrumpió el 15M, que reclamaba una democracia real y el fin de la resignación. Ese movimiento repolitizó a la sociedad española y construyó un relato alternativo a la crisis económica, señalándola como una estafa de la que eran responsables banqueros corruptos, así como políticos que se comportaban como mayordomos de los poderosos. Europa, que durante decenios había sido el faro en la noche del franquismo, tampoco era ya una referencia con las políticas de austeridad, la importancia en el ajuste económico y el abandono de la defensa de los derechos humanos. El contexto en el que nace Podemos fue el del agotamiento de una manera de hacer política, del enfado por el desmantelamiento de nuestro débil Estado social y la sensación generalizada de que las instituciones y los políticos carecían del impulso necesario para no perder los avances logrados en el siglo xx y dar respuesta a los retos del siglo xxi, especialmente los medioambientales y la igualdad de género.

El sistema político vigente en España desde la promulgación de la Constitución de 1978 hasta las elecciones generales de diciembre de 2015 se sostuvo durante casi cuatro décadas sobre cuatro grandes pilares: el bipartidismo, el federalismo implícito, el mantenimiento del statu quo económico y la permanencia de España en la órbita de Estados Unidos.

El deseo y el empuje de los sectores populares por salir de la dictadura se cobraron el precio de ser uno de los países con menor gasto social y mayor impunidad de las élites políticas y financieras por los límites impuestos al proceso de democratización del país.

Las bases sociales que garantizaron el éxito del régimen del 78 fueron unos sectores populares cuya aspiración era convertirse en clases medias y vivir una mejora progresiva de sus condiciones de vida. Hasta cierto punto, este objetivo se cumplió. A pesar del desmantelamiento del tejido industrial y del papel subalterno que la división del trabajo europea reservaba a España, la mejora de las condiciones de vida de amplios sectores de la población y la extensión de los servicios públicos fue una realidad durante los años ochenta y noventa del pasado siglo xx. Pero la última etapa estable del sistema del 78, que precedió a la crisis de 2008, se basó en un modelo de desarrollo sustentado en la especulación inmobiliaria y en el consumo mediante el crédito ilimitado, algo que pronto demostró sus debilidades en un país con una estructura productiva débil y que había transferido gran parte de su soberanía a la Unión Europea.

Con la crisis de 2008, comienza en España una etapa de transformaciones que culmina en el escenario que hoy estamos viviendo, y que deja a nuestro país en una situación difícilmente asumible para un Estado que pretende definirse como social y democrático de derecho. La respuesta de los Gobiernos del bipartidismo fue, básicamente, desplazar la carga y las consecuencias de la crisis del sector financiero a la gente, aplicar recortes y precarizar el mercado de trabajo. Miles de personas pierden su vivienda —en un país donde el ahorro se ha depositado principalmente en la compra de la vivienda— y su empleo, al tiempo que los servicios públicos comienzan a deteriorarse, lo que produce una gran inestabilidad política. Los recortes aplicados en la última etapa de Zapatero y continuados por Rajoy para afrontar la crisis económica fueron determinantes para desencadenar la crisis de régimen que abrió una estructura de oportunidades políticas inédita. La clave fue el ensañamiento con amplios sectores populares y, sobre todo, la terrible frustración de expectativas que afectó a las denominadas clases medias. Algo que supuso el enterramiento de los consensos sociales que sostenían el sistema político. Por primera vez en mucho tiempo, sectores populares y clases medias se sintieron fuera de un sistema político que ponía toda la fuerza institucional en el rescate de los sectores económicos a costa de recortar los derechos y las libertades de las mayorías sociales. La ruptura del pacto social por parte de las élites produjo una grave crisis de representatividad en el sistema político y la evidente sumisión de las élites políticas al poder económico.

El 15M fue la válvula de escape más obvia de esta frustración. Aunque no se expresó con una gramática política clásica, esta movilización proporcionó muchos de los ingredientes de un nuevo sentido común que se expresaba en el rechazo a las élites políticas y económicas y en la denuncia del desmantelamiento de las conquistas democráticas.

El 15M supone un cambio cualitativo en el escenario de la disputa social. Hasta ese momento, los movimientos sociales habían estado planteando un cuestionamiento de la situación social y económica y demandando al Gobierno cambios en las políticas sectoriales. Con el 15M, como se puede comprobar en sus lemas «No somos mercancías en manos de políticos y banqueros» o «No nos representan», se pone encima de la mesa que la separación entre lo político y lo social es artificial, que la política tiene sentido para solventar los problemas de la gente y que no es verdad que basta votar y tener una Constitución para garantizar una vida digna. El 15M señala al *establishment* político denunciando su complicidad con las élites financieras e identificando un núcleo de poder responsable de imponer a las mayorías sociales un modelo de vida contrario a la dignidad humana.

Aquel «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros» es una de las mejores definiciones que se ha hecho en nuestro país de la oligarquía y de su forma de operar: tratar a las personas como mercancía. Mercancía como aquellas personas que trabajan y que, en un determinado momento, se ven sometidas a modelos de contratación muy precarios; mercancía como las personas usuarias de los servicios públicos que afrontan procesos de privatización y pasan de ser sujetos de derechos a ser simplemente números con los que engordar el beneficio. Mercancías que ocultan el derecho de las y los pensionistas a una vejez digna, de la juventud a una formación que le permita tener horizontes, de las mujeres a superar la brecha salarial y de toda la ciudadanía a una vida cultural plural, rica y profunda que permita vivir vidas que merezcan la pena ser vividas.

El «No nos representan» del 15M plantea una crisis de representatividad de las fuerzas políticas existentes. Hay un cuestionamiento claro del propio bipartidismo, es decir, hay un cuestionamiento del sistema político sobre el que se había sustentado el régimen del 78, porque en vez de proteger a la población se convierte en un instrumento idóneo para proteger a los responsables de la crisis.

En definitiva, se da un proceso de degradación que tiene su momento culminante en 2011, con una explosión de la movilización social en la que comienzan a legitimarse nuevas formas de participación política directa y se cuestionan los relatos de la política. Y, de paso, los relatos que los medios de comunicación hacían de la política. Se hace valer entonces la necesidad del ejercicio de los derechos políticos y sociales para poder alcanzar nuevas conquistas, en un contexto en el que se venían dando diferentes experimentos de gestión de la protesta social encaminados a la criminalización.

El movimiento popular había abierto una ventana de oportunidad que ese mismo año se intentaría cerrar por parte de las nuevas élites, por medio de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Se trataron de blindar los intereses de esos nuevos operadores económicos que se han convertido en hegemónicos dentro del país, y es que durante los años previos a 2011 se viene dando, también, un cambio político dentro de las propias élites, convirtiéndose la tradicional oligarquía patrimonial en gestora de los intereses en el territorio de los grandes fondos de inversión internacionales; un proceso fácilmente observable en la propia composición de capital de las empresas del IBEX 35.

Este proceso, lejos de ser lineal, ha estado trufado de contradicciones, de avances y retrocesos, en los que el movimiento popular ha resistido y se ha convertido en un elemento fundamental en la defensa de los derechos, de las libertades y de los servicios públicos. Cuando Esperanza Aguirre hablaba de «recortitos», mostraba la frustración de quienes no pudieron aplicar hasta el final la agenda pinochetista de privatizaciones. Pero que no pudieran hacerlo no se debió a la tibieza de las medidas políticas previstas, sino a la determinación de la gente trabajadora, de las personas estudiantes y pensionistas, de las mujeres, por defender las conquistas democráticas. Esto es algo que debemos ser capaces de apreciar y poner en valor para poder entender las fuerzas y los proyectos en disputa.

Nacimiento de Podemos y ruptura del bipartidismo

Más allá de la respuesta de las élites, el 15M inició un ciclo impugnatorio de amplia movilización social que tuvo como exponentes el movimiento por el derecho a la vivienda, las mareas en defensa de la educación y la sanidad y las huelgas generales. Un ciclo que llegó, al menos, hasta la gran movilización de las Marchas de la Dignidad en la primavera de 2014, una enorme demostración de fuerza que se articuló, por un lado, sobre el eje de confrontación con el modelo de austericidio de la troika y la Unión Europea y, por otro, sobre la aglutinación de actores y sectores sociales muy diversos que trascienden las lógicas tradicionales de participación. Sin este nuevo sentido común antioligárquico acompañado de un punto de pulsión constituyente, jamás hubiera sido posible articular el nuevo espacio político que Podemos representa. La disputa del sentido común fue capaz de introducir contradicciones incluso en el espacio mediático, donde la irrupción de Pablo Iglesias y otros referentes públicos dislocaban la máxima goebbelsiana imponiendo una nueva tesis: una verdad es capaz de derrotar cincuenta mentiras.

En 2011, el PP ganó las elecciones con mayoría absoluta, y el PSOE, el partido más importante del sistema político del 78, perdió entonces casi el 40 % de los votos obtenidos en 2008. Se percibían ya movimientos en el sistema de partidos, con expresiones como el ascenso de UPyD o IU a nivel estatal, las CUP y Cs en Cataluña o AGE en Galicia. Y todo ello en un marco de progresiva crisis territorial, agravada tras la decisión del PP de recurrir al Tribunal Constitucional el Estatut y la posterior sentencia de 2010, generando grandes movilizaciones en Catalunya. Con estas tendencias ya establecidas, en enero de 2014, aparece Podemos para terminar de alterar el tablero político.

El planteamiento con el que nace Podemos pone encima de la mesa la necesidad de romper con las lógicas de representación que venían existiendo hasta ese momento y de facilitar la participación directa de la gente en el proceso. En menos de 24 horas se reunieron más de 100 000 firmas que avalaron la candidatura de Pablo Iglesias al Parlamento Europeo y que fundan así un nuevo espacio político que será determinante durante los próximos años. El Podemos de las elecciones europeas despertó grandes ilusiones que se concretaron en 1,3 millones de votos y 5 europarlamentarios. La Marcha del Cambio, en enero de 2015, marcó probablemente el momento de mayor percepción social de la fuerza de Podemos, pero inmediatamente después nos vimos abocados a una guerra de desgaste de unas dimensiones desconocidas y que tomaron la forma de una guerra sucia de nuevo tipo. Las cloacas del Estado al servicio del poder económico y con la cobertura de los imperios mediáticos mediante acciones legales e ilegales pretendieron subvertir el proceso democrático.

En diciembre de 2015, Podemos e IU sumamos más de 6 millones de votos en las elecciones generales, y junto con las confluencias nos revelamos entonces como la máxima expresión electoral de la estructura de oportunidad que habíamos detectado un par de años antes. El PSOE obtuvo otros 5,5 millones, con lo que ya existía una mayoría para frenar el proceso de involución democrática, pero el PSOE de Sánchez prefirió hacer un pacto que no sumaba con Cs y que, por cierto, daba la Vicepresidencia a Rivera. En ese momento, las inscritas y los inscritos marcaron el camino: no apoyar el Gobierno de PSOE y Cs y concurrir a las siguientes elecciones generales en confluencia con IU y EQUO en el conjunto del Estado. Las elecciones de 2015 marcaron un antes y un después que rompe definitivamente con el sistema político del 78 y que explica además la situación de bloqueo que hemos vivido durante los últimos años.

Se repitieron las elecciones y, a pesar del arduo trabajo de la máquina del fango del poder mediático en coordinación con las cloacas del Estado, en 2016 Unidas Podemos obtuvo 5 millones de votos, aproximadamente los mismos que el PSOE. De nuevo había números para un Gobierno diferente, pero la solución del viejo aparato del PSOE pasó por echar a Sánchez de la Secretaría General para entregar el Gobierno al PP. No porque Sánchez quisiese pactar con nosotras, sino porque su propuesta era repetir por tercera vez las elecciones, aunque en aquella época él mismo le confirmaba a Jordi Évole en una entrevista que aquella estrategia respondía a las presiones que había recibido su partido por parte del poder económico y mediático para no pactar con Podemos. Rajoy supo esperar y revalidó la Presidencia con la abstención de los diputados del PSOE.

Caída de Rajoy y empuje popular

No nos dimos por vencidas. En 2017 mostramos que había números para una moción de censura para desalojar a Rajoy y nos dijeron que no. Dos años después, con esos mismos números, sacamos adelante una moción de censura que echó a Mariano Rajoy de la Moncloa e hizo presidente a Pedro Sánchez. Fue posible gracias a la semilla que supuso la moción que presentamos un año antes, conscientes del rechazo que genera la corrupción sistémica del PP y la insostenibilidad de los recortes de derechos y libertades. Y gracias a los ejemplos de dignidad y de lucha del movimiento popular que llenaron las calles los meses anteriores, representados fundamentalmente por el movimiento feminista en su expresión del 8 de marzo y las manifestaciones de los pensionistas. Si cabe preguntarse quién echó a M. Rajoy, la respuesta es fácil: solo el pueblo salva al pueblo. Con la moción de censura quedó sobradamente demostrado que la aritmética parlamentaria que se planteó tras las elecciones del 20D y el 26J era posible, que los números daban para desalojar al PP de la Moncloa y llevar a cabo una limpieza de las instituciones, hacer políticas para las mayorías sociales y dar oxígeno al diálogo, en un contexto de crisis territorial agravado tras la gestión del 1 de octubre de 2017, cuando el Gobierno del PP optó por la vía de la confrontación en lugar de la del diálogo.

Por un lado, fue la lucha de las generaciones que trajeron la democracia la que propició la caída del Gobierno de M. Rajoy, porque sin su presión al PNV, este no se habría visto obligado a introducir la enmienda de la subida de las pensiones al IPC en los últimos presupuestos del PP, en un intento desesperado por detener las movilizaciones. En Euskadi, este ejemplo del movimiento popular fue clave para vehicular cambios en las agendas políticas. Así lo atestiguan las personas pensionistas que cada lunes pasaban por Sabin Etxea, camino de la plaza del Ayuntamiento de Bilbao, para recordar la necesidad de impulsar políticas sociales y desalojar al PP. Sin la presencia sostenida de estas movilizaciones, el PNV no hubiese retirado su apoyo al PP en la moción de censura.

Por otro lado, la convocatoria de huelga feminista y las movilizaciones masivas del 8M, que se llevaron a cabo en marzo de ese mismo año, demostraron la fuerza de un movimiento capaz de aglutinar a amplios sectores de la sociedad, con una fuerte participación de jóvenes, y que plantea cuestiones clave, como la necesidad de la revolución de los cuidados para poner la vida en el centro. En este contexto se impuso la urgencia de la agenda social por medio de la movilización y la organización social, articulando el protagonismo popular como eje del cambio político. La emergencia climática devolvió igualmente los viernes a los jóvenes a las calles, reclamando que solo hay un planeta y rompiendo con la lógica del crecimiento que va a obligar a repensar el modelo económico de manera que no sea lesivo para el medio ambiente.

Pero todos los giros que se producen en la agenda política durante estos años no son producto de las dinámicas internas de los partidos, sino, sobre todo, de las corrientes de cambio que se producen en lo social y que son capaces de trascender a lo político. Sin el 15M jamás hubiese existido Podemos, pero sin el cerco de la corrupción, sin el 8M y sin el movimiento pensionista tampoco habría sido posible echar a Mariano Rajoy.

Por tanto, la década pasada es una década perdida en el ámbito institucional estatal, una década en la que se han impulsado medidas que suponen un retroceso de derechos para las mayorías sociales, pero no se ha puesto en marcha, desde las instituciones, ninguna de las políticas que nuestro país necesita para afrontar los grandes retos que tenemos por delante. Pero, en cambio, es una década en la que el movimiento popular adopta nuevas formas y, a través de diferentes dinámicas y procesos, consigue impulsar giros en la agenda política y pone en primer plano algunas de las necesidades de la mayoría social. Un movimiento social que no siempre tiene forma y que a menudo se expresa de manera «destituyente», impugnadora de lo existente, aunque no en todos los casos se articula con la forma con la que tradicionalmente los movimientos sociales se han expresado.

El Gobierno en solitario del PSOE no consigue sacar adelante los presupuestos, y se convocan nuevas elecciones en abril de 2019. Unos comicios en los que UP debía convertirse en una fuerza residual y de los que salimos con casi 4 millones de votos, pero que nos dejaron una composición política novedosa y verdaderamente alarmante. Después de haber conseguido 12 escaños en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, la formación reaccionaria VOX irrumpía en el panorama estatal con 24 diputados, continuando la ola reaccionaria inaugurada por Trump y Bolsonaro. Los seguidores de Steve Bannon consiguen arrastrar hacia posiciones de la extrema derecha tanto a Cs como al PP, agrupándose en torno a un mismo proyecto político que les permita el control de las instituciones en algunas de las autonomías más importantes del país. Esta radicalización de los planteamientos políticos se lleva prácticamente por delante a la formación de Albert Rivera, que con su dimisión afianza a Cs definitivamente como la muleta de un PP que probablemente acabe por absorberlos. En cuanto a la receta de la derecha aznariana para las próximas décadas, puede resumirse fácilmente a través de algunos elementos centrales: más neoliberalismo y violencia social, más judicialización como forma de afrontar cualquier conflicto, la recentralización para resolver la crisis territorial y las *fake news* para dar la pelea por un relato construido sobre lógicas de exclusión social.

Tras varios meses de negociaciones y batalla por el relato, el *establishment* empuja fuerte para que el PSOE consiga un acuerdo con Rivera para cerrar un pacto de Gobierno. La banca, la patronal y el ecosistema mediático se niegan a aceptar la presencia de UP en el Gobierno.

Las elecciones de abril ya evidenciaban que la única salida al bloqueo era la conformación de un Gobierno de coalición que pusiese en el centro la agenda social y el diálogo territorial frente a la agenda neoliberal y de involución democrática que planteaban las fuerzas reaccionarias. UP trabajó durante los meses posteriores a los comicios para que en España hubiese por fin un Gobierno estable, consciente de que la única salida a la nueva configuración política y la nueva correlación de fuerzas es la participación en el Gobierno a través de una fórmula de coalición. Sin embargo, el PSOE no se atreve y prefiere ir a elecciones nuevamente en noviembre, con la vana esperanza de que UP dejase de ser una fuerza relevante.

Ante este escenario, el *establishment* trabaja sobre dos alternativas a la crisis de Gobierno: o el modelo aznariano de los trillizos reaccionarios, o un modelo macroniano en el que PSOE y Cs garanticen seguir profundizando en la agenda neoliberal. Ambas salidas hubiesen asegurado la tranquilidad de las élites al mantener la línea maestra de un modelo basado en el recorte de derechos y libertades. Sin embargo, tras el nuevo paso por las urnas el 10 de noviembre, demostramos que seguimos teniendo una fuerza decisiva para formar Gobierno frente a una ultraderecha que crece a pasos agigantados, con 52 escaños. Finalmente, frente al miedo, que había sido el principal aliado de las fuerzas reaccionarias, la ilusión, la determinación y la esperanza de millones de personas hicieron posible un Gobierno de coalición para la profundización democrática y para detener la involución.

Los resultados electorales pusieron de nuevo en el centro las dos contradicciones que abren en canal a nuestro país. Por un lado, la cuestión social y la disputa por una sociedad donde las instituciones tengan en el centro de la política pública la garantía del derecho de la gente a vivir bien y donde los servicios públicos se articulan como una garantía democrática fundamental. La vida, por tanto, como un eje de construcción política que sitúa la necesidad de superación de las lacras del patriarcado e inseparablemente unida a la sostenibilidad ambiental: sin planeta, no hay vida. Debemos al feminismo la expresión «una vida que merezca la pena ser vivida», que traslada la idea de los cuidados al conjunto de la sociedad, hace de la idea de cuidarnos uno de los elementos esenciales que ha ayudado a Podemos a pensar una España que no sea patrimonio de la derecha y que ha pasado a formar parte del núcleo de nuestra política.

Por otro lado, frente a los intentos de negar el carácter plurinacional y plurirregional de España, han emergido con fuerza espacios políticos nacionalistas, regionalistas e incluso de carácter provincial que ponen de manifiesto la necesidad de abordar la cuestión territorial desde el diálogo, la solidaridad, el derecho al autogobierno y la soberanía popular.

Involución o profundización democrática: Gobierno de coalición como oportunidad y contexto internacional

En los últimos años estamos experimentando una reorganización de las fuerzas reaccionarias a nivel internacional, que se ha profundizado tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos en noviembre de 2016. Los avances de estas fuerzas se ven ejemplificados en los casos de Viktor Orbán en Hungría, Matteo Salvini en Italia, Jair Bolsonaro en Brasil o VOX en España, así como los golpes de Estado en América Latina, como el reciente caso de Bolivia. Las élites financieras responden para frenar cualquier avance democrático en los derechos de las mayorías sociales que pueda suponer normas y límites a los poderes financieros, basados en la especulación y la economía extractiva. Los elementos comunes de estas fuerzas reaccionarias son el ataque directo a los derechos de los sectores populares; la puesta en práctica de los principios de la economía neoliberal, como el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos; la defensa de los privilegios de las élites, y un pensamiento neoconservador incapaz que ataca sin cuartel los mínimos básicos de la democracia: el pinochetismo del siglo XXI.

En este marco, se está llevando a cabo un proceso de *uberización* de la economía, que no es más que un modelo económico disfrazado de una supuesta innovación tecnológica y de economía colaborativa, pero que se basa en estrategias planificadas para la constitución de monopolios en sectores económicos clave, como los servicios públicos. El proceso de *uberización* de la economía tiene un componente de ingeniería económica, social y política de determinadas fracciones del capital financiero que se considera por encima de cualquier soberanía o jurisdicción, y se basa fundamentalmente en dos ejes: por un lado, la elusión fiscal de las corporaciones y grandes empresas transnacionales como mecanismo de saqueo, con matriz en paraísos fiscales, que facilita la desvinculación de estas corporaciones de la sociedad donde realiza su actividad económica; y por el otro, formas renovadas de explotación, en las que la creación de falsas y falsos autónomos o fórmulas contractuales ajenas a un derecho laboral democrático renuevan esquemas de trabajo más propios del siglo XXI. Eluden así la obligación de contribuir al bienestar de la población por medio de servicios públicos pagados con una política impositiva progresiva, propia de los Estados democráticos, al tiempo que crean puestos de trabajo caracterizados por la precariedad. Se trata de un mecanismo de saqueo de una minoría de grandes corporaciones que disfrutan de importantes privilegios fiscales frente a la gente trabajadora, autónomos y pymes, y que provocan en el Estado un enorme agujero de ingresos con respecto al promedio europeo.

El segundo elemento de este esquema es la imposición de la precariedad como forma de vida en las mayorías sociales, que se despliega en los ámbitos de la producción y de la reproducción. La precariedad como sinónimo de incertidumbre, de inseguridad vital frente al miedo que provoca una sociedad regida por la ley del más fuerte. Es un mundo laboral que muta, donde se pretenden normalizar eufemismos como la «desconexión» frente al «despido», y donde la supuesta flexibilidad busca llevarse por delante las leyes laborales.

Los procesos de *uberización* establecen como objetivo el control del territorio como un elemento central, intentando generar políticas de monopolio en sectores estratégicos: el transporte y la movilidad, la logística, el sector agrícola, la vivienda, la dependencia, la sanidad, o incluso los barrios y ciudades a través de la gentrificación y la turistificación, son algunos ámbitos donde los fondos buitres pretenden jugar un papel protagonista.

Además, se ha llevado a cabo en nuestro país un proceso de ruptura territorial basada en el desequilibrio entre las zonas urbanas y las rurales. La España vaciada es resultado de un proceso paulatino de despoblación de las zonas rurales, de desvertebración territorial, de desmantelamiento de los servicios públicos y de crisis del sector primario provocada por el empuje del agronegocio, entre otros factores. El territorio rural en nuestro país abarca el 80 % de nuestra geografía, pero en él solo vive el 20 % de la población. Este desequilibrio se ha intensificado en los últimos tiempos, afectando incluso a la pérdida de población en ciudades pequeñas y medianas. La concentración en unas pocas grandes ciudades y zonas costeras, al calor de empleos precarios, nos deja un país partido, desconectado y con enormes desigualdades territoriales. Frente a esta situación debemos articular un proyecto político para hablar de pueblos vivos y con futuro, revitalizando la estructura social y económica, generando una dinámica que vuelva a repoblar de ilusión nuestros pueblos, una política de Estado para hacer justicia a un mundo rural vivo y con futuro mediante un enfoque integral, a la vez que se apuesta por modelos turísticos sostenibles con los derechos laborales y medioambientales.

Nos encontramos, por tanto, ante una disyuntiva clave: la amenaza de un proceso de involución social o la posibilidad de llevar a cabo una profundización democrática. Frente a los avances de la extrema derecha y su modelo social, basado en los recortes de derechos y privilegios, el movimiento popular lleva muchos años defendiendo los derechos de las mayorías sociales. Las aspiraciones democráticas de conquista de los derechos que se han planteado desde numerosos ámbitos sociales —como el movimiento de pensionistas, el movimiento feminista, la defensa del medio ambiente y del planeta ante la emergencia climática, el derecho a nuestras ciudades, a nuestros barrios y pueblos— están enfrentándose a ataques frontales de la extrema derecha, al poner en cuestionamiento las bases sobre las que se sustenta este modelo económico capitalista y patriarcal, y la necesidad de garantizar una sociedad de derechos para la gente trabajadora y las mayorías sociales de nuestro país.

El pasado 10 de noviembre de 2019 los resultados electorales demostraron la voluntad social de conformar un Gobierno de coalición como oportunidad para impulsar, aún con muchas limitaciones y contradicciones, un bloque histórico democrático y popular, no solo de las distintas fuerzas políticas que componen el espacio plural del cambio y de los colectivos y movimientos que en la última década han peleado por la justicia social, sino con los millones de personas que han hecho parte del cambio político-social que ha abierto la oportunidad de un proceso de profundización democrática.

Desde la perspectiva internacional, el compromiso político de Podemos es claro: la transformación profunda de esta agenda mundial existente hacia una que se guíe por la democratización en la toma de decisiones globales; que ponga como criterios básicos de la economía mundial el desarrollo ecológicamente sostenible y socialmente justo, y no los beneficios de una minoría de transnacionales y fondos buitres que, literalmente, están destruyendo el planeta; y que haga de la búsqueda de la paz y de la garantía de todos los derechos para todas las personas el horizonte hacia el que caminar.

En este contexto, el Gobierno de coalición nos permite además reafirmarnos en nuestro compromiso con la democracia internacional, no solo para mantenerlo y actualizarlo, sino para servir de referente ante la ola reaccionaria seguidista de las políticas de Trump. Por supuesto, no podemos olvidar que han sido precisamente los movimientos feministas y los movimientos ecologistas los que han señalado que el camino que hay que recorrer frente a las políticas de odio y de involución democrática pasa por establecer lazos a nivel global y desde abajo, señalando como responsable transversal a un modelo incompatible con la vida. Es con ellos y con las organizaciones de la sociedad civil con quienes debemos trabajar para construir nuevas bases sociales, económicas y políticas que impulsen la esperanza de justicia social, democracia y libertad real que siempre han empujado nuestra propia organización. Esa es la principal tarea que nos disponemos a asumir en la nueva etapa que comienza, también con las organizaciones hermanas de otros países y Estados, guiados por los principios democráticos y de soberanía de los pueblos; de políticas de paz y resolución dialogada de los conflictos; de todos los derechos para todas las personas; de justicia económica global; de feminismo y de justicia ecológica.

Un Gobierno para las mayorías sociales

La entrada de Podemos en el Gobierno de coalición es una oportunidad para avanzar en la dirección de profundización democrática en nuestro país. El acuerdo de Gobierno tiene dos dimensiones fundamentales: por un lado, reconstruir los derechos arrebatados a la gente trabajadora durante la pasada década, reparando todas las traiciones a España que se han llevado a cabo mediante las políticas de austericidio, la corrupción y la batalla cultural reaccionaria, intentando retroceder varias décadas atrás en materia de derechos; y por otro lado, hacer posible la construcción de nuevos derechos: en el ámbito de los derechos sociales, del feminismo, del ecologismo, de la España vaciada, de la justicia fiscal, de la memoria democrática, del acceso a la cultura o de los derechos de los animales, así como abrir una vía de diálogo para encontrar una salida negociada al conflicto territorial. Y recuperar ese marco que en algún momento tuvo Europa como garante de los derechos humanos en el ámbito internacional desde una perspectiva solidaria.

Se trata de un programa con capacidad de hacer de la próxima década la década del impulso democrático y popular en España, para convertir a nuestro país en un referente internacional en la protección de los derechos sociales como un elemento esencial de los derechos humanos. Convertir el «Sí se puede» desde el Gobierno debe significar que los problemas de la gente se transforman en obligaciones institucionales y en políticas públicas que pongan a las instituciones al servicio de las mayorías sociales.

Somos conscientes del momento de tensión que vivimos, y de que el Gobierno de coalición va a estar sometido constantemente a presiones por parte de las élites financieras y de las fuerzas reaccionarias para imponer su propia agenda política en contra del avance de derechos de la mayoría. Todo ello forma parte de la estrategia que están llevando a cabo a nivel internacional, y nuestro país no va a estar exento de ello. Frente a las presiones de aquellos que quieren ejercer el poder sin presentarse a las elecciones, es importante el empuje del movimiento popular, que tire de la cuerda para la articulación de nuevas conquistas democráticas, desempeñando de este modo una labor de presión social que imponga la agenda social frente a las fuerzas reaccionarias y al poder de las élites. Y, además, siendo una organización consolidada donde la militancia ocupe un papel fundamental.

Profundización en el carácter popular de Podemos

Durante estos años, el movimiento popular ha marcado el cambio político en nuestro país. Sin el 15M no se habría roto el bipartidismo. Sin el 8M y sin la lucha de las y los pensionistas, no se habría echado a M. Rajoy de la Moncloa. Sin todo el empuje de la gente organizada, que busca poner un dique a la involución democrática, no habría un Gobierno de coalición. Es fundamental agradecer a la sociedad civil, a todos los colectivos y movimientos sociales que a lo largo de la historia de nuestro país han defendido la justicia social. Los derechos y las libertades que disfrutamos ahora no han sido concesiones de los grandes prebostes de la Transición, sino las conquistas de miles y miles de mujeres y hombres que, incluso jugándose la vida, lucharon por traer los avances democráticos a nuestro país.

En esta nueva fase va a ser igualmente importante el protagonismo popular en el proceso de cambio. El movimiento popular es plural y diverso, y tiene numerosas expresiones en el ámbito de lo social, lo político y lo cultural. Apostar claramente por el fortalecimiento del movimiento popular tiene el objetivo de que sea la gente la que tenga la capacidad de determinar su propia vida por medio de la participación directa en el proceso político y social.

Durante todo este tiempo, hemos ido vehiculando un proceso en el que nos resultaba un elemento central la cuestión de la articulación política desde lo social. Planteábamos que era necesario llevar a cabo un trabajo fundamental de conexión y acabar con esa separación artificial entre lo social y lo político que ha intentado imponer el neoliberalismo, y que no busca sino resignar a las mayorías para que no vean en la política la herramienta para la transformación social. Eso nos ha permitido articular un programa político y un discurso conectados con muchas realidades sociales. Modestamente, creemos que somos una organización comprometida con los sectores populares y con autonomía respecto a las élites económicas.

En este marco, Podemos se plantea como un proyecto de carácter democrático y popular que quiere estar en las instituciones y en el tejido social. Podemos es una expresión política del movimiento popular que pretende aportar desde el concurso de sus modestos esfuerzos al proceso de empoderamiento de nuestro pueblo para la construcción de la democracia en el orden social, económico, político, cultural y ambiental. En este sentido, nuestra organización es y debe ser una herramienta útil que permita ampliar la participación de las mayorías sociales en el proceso de cambio que se está dando en nuestro país. Los sectores populares tienen que participar del proceso que determina sus condiciones de vida, con sus miedos, sus ilusiones, sus aspiraciones vitales, sus esperanzas y, sobre todo, con la potencia para impulsar

cambios en profundidad. Es nuestra obligación señalar las ventanas de oportunidad, hacer posible lo que ahora mismo es imposible, ayudar a desplegar las nuevas utopías como fuerza revolucionaria que permita dedicar energías a la posibilidad de un mundo más cargado de esperanzas para nosotras y para quienes que vengan detrás.

En esta nueva etapa, es estratégico llevar a cabo un fortalecimiento de la organización en dos aspectos clave. Por un lado, profundizar en nuestro perfil de fuerza parlamentaria y de gobierno, y como segundo elemento, ahondar en el carácter popular en conexión permanente con la gente trabajadora, como cuestión central para avanzar.

Apostamos por la puesta en práctica de una nueva cultura militante, enfocada en el trabajo en lo social y en la facilitación de procesos que refuercen el movimiento popular. Como militantes, tenemos que apoyar y fortalecer el movimiento popular en nuestros barrios, pueblos, ciudades, centros de estudio, de trabajo..., entendiendo que la política no debe estar solamente en manos de los políticos. Es necesario profundizar en la capacidad que tiene la gente para intervenir sobre sus propios problemas, clave en ese proceso de conquista de derechos tan imprescindible para nuestra sociedad. Quienes queremos que la gente de nuestro país tenga derecho a vivir bien tenemos que participar y aportar nuestro granito de arena. Este nuevo escenario abre oportunidades, pero sigue siendo más necesario que nunca ampliar la democracia y que la gente sea protagonista de sus propias vidas. Mientras la agenda de las élites está marcada por la imposición de la precariedad, por la privatización de los servicios públicos, por la desigualdad y el recorte en derechos y libertades, debemos trabajar en una nueva cultura militante que haga frente a esa agenda y ponga en valor la capacidad de transformación de la gente común, bajo la premisa de que todo lo útil y todo lo hermoso que existe se hizo de mano de la gente que trabaja, de la gente que cuida, de la gente que piensa y obra pensando en las mayorías.

En estos años, va a jugar un papel clave la juventud, representativa de una generación que ha crecido con la normalización de la precariedad y que no tiene recuerdo de las grandes luchas populares de nuestro país, que consiguieron materializarse en las conquistas de derechos. Tanto el movimiento feminista como el ecologista son claros ejemplos del interés por la participación política y social de nuestros y nuestras jóvenes, en defensa de un futuro digno para las generaciones presentes y futuras. La juventud tiene una capacidad extraordinaria de construir lo nuevo y, por ello, necesitamos facilitar ese potencial al máximo en un diálogo con los espacios autónomos en los que la juventud pueda tener sus propios análisis y dinámicas, haciendo valer la política como la mejor herramienta de transformación de la realidad para plantear en colectivo un proyecto de vida nuevo y propio.

Mientras las élites tratan de imponer la precariedad mediante el miedo, las políticas del odio y la atomización de la gente trabajadora a base de la individualización, debemos plantear y ejercer la fraternidad y la sororidad popular como los elementos que pongan en valor las prácticas de solidaridad y apoyo mutuo de los sectores populares, como guía para la articulación de la nueva institucionalidad. Tal y como plantea el movimiento feminista: frente al «ellos primero», se plantea

el «nosotras juntas». En este sentido, debemos ser humildes y aprender, codo con codo, de las experiencias de lucha que están llevando a cabo las mayorías sociales en la defensa de los derechos. Nuestro papel como militantes y activistas sociales debe ser apoyar los movimientos desde el respeto a su autonomía, teniendo el protagonismo popular como objetivo político.

Espacio plural de las fuerzas del cambio

Podemos apuesta desde el primer momento por concurrir a las elecciones municipales con alianzas propias que expresen la unidad popular. Así, en mayo de 2015, se concurre a las elecciones municipales con candidaturas de unidad popular municipales que en algunos casos fueron capaces de sumar al conjunto de fuerzas del cambio para ganar, y se consiguieron los Ayuntamientos del Cambio en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Ferrol, Zaragoza, Santiago de Compostela y Cádiz.

El 20D, Podemos se convierte en una referencia de estas fuerzas a nivel estatal con un resultado electoral magnífico; primera fuerza en Euskadi, segunda fuerza en Madrid y Navarra. También cosecharon unos fantásticos resultados las confluencias: En Comú Podem se sitúa como primera fuerza política en Cataluña; En Marea, como segunda fuerza en Galicia; y la coalición valenciana, también en segundo lugar.

El 9 de mayo de 2015 tiene lugar el nacimiento de Unidas Podemos, materializado por Podemos e IU, en lo que supone un revulsivo frente a la situación de hastío del debate sobre la formación de Gobierno, proponiendo el impulso de unidad popular como un espacio social y político alternativo al bipartidismo.

A lo largo de nuestro caminar, hemos sufrido conflictos y algunas escisiones. La práctica nos ha demostrado de nuevo la fuerza de la sabiduría popular: allá donde los espacios unitarios se han mantenido, los resultados han sido mejores que donde se han producido rupturas. El *establishment* ha alentado estas rupturas generando espejismos mediáticos que se han concretado en estrepitosos fracasos.

El resultado obtenido en las elecciones del 10 de noviembre demuestra que Unidas Podemos y el resto de confluencias en las que participamos son una apuesta acertada para el proceso de construcción popular que ha truncado las aspiraciones oligárquicas de reducir el espacio del cambio a una fuerza residual, y que ahora nos convoca a pasar de la unidad de acción electoral a la unidad de acción política a través del trabajo conjunto sobre el territorio.

Tras los últimos comicios, empezamos un nuevo camino en el que es más necesario que nunca fortalecer el espacio plural de las fuerzas del cambio, que es en definitiva un reflejo de nuestro país; y, sobre todo, va a ser la garantía de que el diálogo ocupe el papel central que necesita España. Esta unidad será imprescindible también de cara al éxito de la legislatura, a tenor de los equilibrios políticos que la ciudadanía ha alumbrado en las urnas y que, como es evidente, van a determinar el conjunto de la acción política en el Parlamento y también en el Gobierno.

Nuestra postura no ha cambiado. Frente a los discursos de odio y enfrentamiento que ha enarbolado la derecha, siempre hemos defendido el diálogo, la empatía, la fraternidad y la sororidad como pilares de los puentes necesarios a la hora de reconocer el carácter plurinacional y solidario de nuestro pueblo. Frente a las políticas reaccionarias de la extrema derecha y sus ataques a las que son las bases materiales de la democracia, son claves la fortaleza y la unidad de este espacio político. Pero no solo eso. Es clave, también, la complicidad entre este espacio, la sociedad civil organizada y los movimientos sociales.

Consolidar las confluencias se hace imprescindible para lograr espacios políticos para la acción institucional, la construcción popular y la movilización social de manera que consigamos ser útiles en las instituciones y en la calle. Es urgente profundizar en la construcción de un bloque político y social alternativo en el que se generen espacios de acción política más allá del maratón electoral, en las instituciones, en la sociedad civil y en la calle.

Tenemos que ser capaces de construir un bloque histórico democrático, no solo con las distintas fuerzas políticas que componemos esta confluencia, sino con todos los colectivos y movimientos que en la última década han peleado por la justicia social. Nuestro éxito político en esta etapa se va a medir en la capacidad de construir dicho bloque histórico. Solo esa va a ser la garantía de que seamos capaces de resistir los ataques de la reacción, así podremos abordar la tarea de llevar a cabo transformaciones profundas y duraderas, de mano de nuestro pueblo, para democratizar el poder y la riqueza en nuestra patria.

Debemos reflexionar también sobre esa construcción plurinacional de España, que incluye no solamente a las nacionalidades históricas, sino también a toda la población migrante o de origen migrante, que cada día pelea para que este país sea más justo, más democrático y más solidario para todas y todos. Hablar, por tanto, de que España es plurinacional también es hablar de que debemos trabajar para garantizar los derechos de todas esas personas: derechos sociales, pero también derechos civiles y políticos.

Quienes proponen una España uniforme y pequeña, realmente ni entienden ni aceptan España, nuestra patria, tal y como es. Estamos orgullosos y orgullosos de pertenecer a un país diverso, de defender sus distintas lenguas, sus distintos sentimientos y su riqueza cultural. Hoy más que nunca defendemos la necesidad de enarbolarnos, frente a los discursos del odio, el diálogo, la empatía y la fraternidad, y, sobre todo, que tras la necesidad de fortalecer el espacio plural de las fuerzas del cambio está el camino para afrontar la crisis social y territorial que atraviesa nuestro país, que incluye también los problemas del campo, la pérdida de soberanía o las políticas centralistas y privatizadoras que condenan a nuestros pueblos al olvido.

No renunciamos a nuestros sueños: por una república plurinacional y solidaria

Los procesos constituyentes tienen dos caras: lo que se escribe y lo que realmente se hace. Una cara formal y otra material. Desde el punto de vista formal, nada se ha movido desde la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución una noche de agosto de 2011. Pero quienes quieren dismantelar toda la parte social de nuestra Constitución no han parado.

Hay un proceso destituyente en España y en Europa que pretende revertir toda la estructura del Estado social. Las élites están rompiendo todos los consensos políticos, sociales, económicos y culturales, al tiempo que quieren imponer una ley mordaza integral que evite las protestas. Han sido puestos en cuestión derechos sociales y servicios públicos, derechos civiles y políticos, derechos culturales, el derecho al autogobierno, el derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna, a una salud y educación dignas, a una pensión digna. La disputa tiene que poner en el centro, ahora mismo, como uno de los elementos esenciales de la pelea política, la lucha contra las desigualdades.

Frente a las fuerzas reaccionarias, necesitamos articular la disputa en el seno del Estado abriendo lógicas de entendimiento con actores muy diversos para dislocar la estrategia de involución democrática que trasciende nuestras fronteras. El Estado, que es parte de la solución, sabemos también que es parte del problema, porque arrastra muchos sesgos, porque tiene inercias, porque refleja las batallas históricas que han ganado los poderosos de clase, de género, de raza, porque es un espacio donde hay que dialogar, parlamentar y acordar. El Gobierno, como la conducción de un Estado que quiere hacer valer la democracia, debe responder a las emergencias sociales y territoriales que aquejan nuestro país. Y la principal, poner todos sus esfuerzos para terminar con las desigualdades.

Por eso mismo, necesitamos no caer en el error de limitarnos a gestionar lo que existe. Nacimos soñando un mundo alternativo y supimos que participar en el Gobierno solo tenía sentido si la constelación democrática se dibujaba de la mano de quienes sienten la necesidad de un país a la medida de nuestro pueblo.

El 15M supuso una pulsión constituyente frente al ataque de las élites a las conquistas democráticas más elementales. Una pulsión que respondía a un proceso de ruptura constitucional articulado por las viejas y nuevas élites nacidas al calor de la crisis de 2008. Esas remozadas oligarquías lanzaron un órdago, apoyadas por la

involución neoliberal de la Unión Europea, que supuso el cuestionamiento de todas las estructuras del Estado, que no dejaba intacto ningún rincón, fuera la Jefatura del Estado, la Judicatura, la escuela, la sanidad, llegando hasta el municipalismo. Y, en esa pelea, el movimiento feminista, que ha irrumpido como uno de los sujetos de cambio más desafiantes, se ha convertido precisamente por eso en un objetivo de las fuerzas de derecha y de ultraderecha, así como de los intereses neoliberales.

Estamos en un momento histórico crucial. En una Europa que está perdiendo derechos, en un contexto de crisis económica mundial prolongada, bajo la amenaza ecológica, con amenazas contra los avances alcanzados por las mujeres. Una Europa a la que le falta empuje para recuperar su pujanza frente a la agresividad imperial de Estados Unidos, la emergencia de China como potencia mundial económica y tecnológica y la recuperación de Rusia.

No se trata solamente de parar los golpes del modelo neoliberal, aun no siendo pequeña esta labor. Nuestra principal tarea pasa por seguir alentando el proceso de construcción popular en clave constituyente, trabajando cada día desde esa idea de proceso constituyente que nos obliga a pensar hacia dónde queremos ir y que se compromete con el pueblo en el empeño.

Tanto en el seno de la sociedad como en cada rincón de las instituciones, tenemos que hacer énfasis en los valores republicanos, los valores que priman lo público, lo que es de todas y todos, esa esfera pública virtuosa que hace de la fraternidad y de la sororidad un escenario compartido y defendido por el contrato social. Valores republicanos que tienen como horizonte luchar contra las desigualdades del tipo que sean.

Desde el protagonismo popular, seguimos apostando por poner en el eje central de la construcción política la sostenibilidad de la vida. Como proyecto histórico, nos sigue guiando la construcción de una república plurinacional y solidaria que reparta de manera equitativa las ventajas de vivir juntos y juntas, y que defienda las diferencias cuando expresan identidades que nos enriquecen.

ANEXO 1

Horizonte estratégico
tras la crisis del COVID-19

UN PAÍS
CONTIGO
PODEMOS

Mayo de 2020

PODEMOS

Objetivo

El presente documento, «Horizonte estratégico tras la crisis del COVID-19», se plantea como anexo al *Documento político*, a modo de actualización de las tesis políticas ahí planteadas, adaptándolas al contexto actual de crisis derivada del COVID-19. El contexto de tensión profunda entre involución y profundización democrática y la necesidad de llevar a cabo un empuje del proceso de profundización democrática sigue más vigente que nunca, y es por ello necesario complementar las tesis planteadas en el primer documento con lo vivido estos meses durante el COVID-19, abordando las tareas más inmediatas y el horizonte estratégico que tenemos por delante como pueblo.

Contexto: crisis del COVID-19

La crisis del COVID-19, que se manifiesta en nuestro país desde hace unos meses, ha supuesto la peor pandemia a la que nos enfrentamos a nivel mundial en un siglo. Miles de personas se han visto ya afectadas por el virus, y su impacto social y económico va a afectar al conjunto de la población. Nos encaminamos a una de las peores crisis de nuestra historia reciente, en un contexto en el que mucha gente aún no había conseguido salir de la anterior de 2008, y que, sin duda, va a condicionar el mundo a partir de ahora en todos los ámbitos de la vida.

Ante este contexto, el Gobierno de coalición ha logrado avanzar hacia la consolidación de un eje de protección social fuerte para el conjunto de la población, especialmente para aquellos sectores sociales que arrastraban una progresiva precarización en sus condiciones de vida, y para personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. El Escudo Social ha incorporado medidas de especial importancia para garantizar los derechos humanos en nuestro país, como la suspensión de desahucios y lanzamientos a hogares vulnerables sin alternativa habitacional; la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables; la protección a los trabajadores y las trabajadoras mientras se garantiza la disminución de movilidad para frenar la curva de contagios, con medidas de protección frente al despido y la cobertura por desempleo a través de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE); un Ingreso Mínimo Vital al que puedan acceder las personas y las familias en situación de vulnerabilidad, como una medida tanto de justicia social como de eficiencia económica, porque va a permitir llenar la nevera a miles de familias y mantener un nivel

mínimo del consumo, lo que redundará en reforzar la economía de los autónomos y las autónomas y de las pymes; aumentar la difusión de los recursos disponibles para las mujeres víctimas de violencia machista, así como aumentar las medidas de protección. Todas estas medidas y tantas otras tienen como objetivo proteger desde el Gobierno y las instituciones a los sectores populares de nuestro país, especialmente a la gente más vulnerable, defendiendo sus hogares, sus puestos de trabajo, y garantizando que nadie se quede atrás.

Tal y como analizamos en el *Documento político*, la salida a la anterior crisis de 2008 se caracterizó por medidas que provocaron un retroceso en materia de derechos de la mayoría social de nuestro país. Se priorizaron los beneficios de las élites financieras a costa de los derechos de la mayoría social, como el rescate a la banca con más de 60 000 millones de euros en concepto de ayudas públicas, aún sin devolver; se recortaron drásticamente las políticas públicas en materia social, como en educación, sanidad, vivienda o cultura, entre otras; se comenzó a implantar la precariedad como forma de vida, que afecta ya no solo al ámbito laboral, sino también al resto de ejes que permiten que podamos vivir una vida digna; se llevó a cabo un progresivo debilitamiento de los servicios públicos, como en el ámbito de la sanidad o los cuidados, entre otros; y se produjo un desmantelamiento de la capacidad productiva y de los sectores estratégicos, al tiempo que se permitía la entrada de empresas multinacionales y fondos buitres en nuestro país, que solamente persiguen su beneficio económico a través de la especulación con bienes esenciales y el control del territorio.

La crisis del COVID-19 nos ha situado frente a un espejo y ha puesto de manifiesto los efectos devastadores de estas políticas de recortes para el conjunto de la población, que no han hecho más que intentar destruir lo común. Las dificultades de las personas profesionales del sector sanitario para poder desarrollar su trabajo en condiciones dignas, la precariedad que viven las personas que desarrollan labores de cuidados o la dificultad de nuestro país por conseguir bienes necesarios como mascarillas o respiradores son algunos ejemplos de ello.

Si bien a principios de año nadie podía prever que en menos de dos meses se declararía una situación de excepcionalidad como consecuencia de la crisis global del COVID-19, desde el pasado mes de marzo, la población en España está realizando enormes esfuerzos, de manera ejemplar, para respetar el confinamiento y evitar cualquier tensión y desborde que pueda sufrir nuestro sistema sanitario. Es fundamental poner en valor el trabajo de miles de personas en nuestro país, en el ámbito de la salud, de los cuidados, de la alimentación o del transporte, que se juegan la vida en primera fila para afrontar el COVID-19 y garantizar las necesidades básicas de la población durante el confinamiento.

Estos meses se han desarrollado redes de solidaridad para dar respuesta a las necesidades de la gente, como la fabricación y distribución de equipos de protección individual (EPI); la reconversión de algunas industrias por parte de la propia gente trabajadora para la fabricación de materiales necesarios para el sistema sanitario, como respiradores; la autoorganización de redes de apoyo mutuo vecinal para apoyar

a personas en situación de vulnerabilidad mediante la compra de alimentos básicos o productos farmacéuticos; la creación de bancos de alimentos autogestionados para personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, por medio de donaciones económicas y de alimentos por particulares, colectivos y pequeñas empresas; o la creación de cajas de resistencia para organizaciones sociales que están sufriendo las consecuencias de la crisis del COVID-19 al haber dejado de percibir ingresos. Frente a la estrategia de las élites financieras de subordinar a nuestro país a sus intereses económicos, ha sido el movimiento popular el que ha desarrollado herramientas de fraternidad y sororidad popular.

Un Gobierno para que nadie se quede atrás

Ante este nuevo contexto, el recién constituido Gobierno de coalición está afrontando la crisis, como hemos analizado anteriormente, desde un paradigma completamente distinto al de los anteriores Gobiernos, articulando medidas desde lo público, especialmente en situaciones excepcionales de gran incertidumbre, a través de un Escudo Social que ponga en el centro la vida de la gente. A diferencia de lo ocurrido tras la crisis de 2008, la acción de Gobierno juega un papel clave en la defensa de los derechos de la mayoría social, demostrando que es fundamental que las instituciones estén al servicio de la gente, con el objetivo de recuperar los derechos arrebatados durante estos años y defender la conquista de nuevos derechos para el conjunto de la población.

El pasado 14 de marzo de 2020 entró en vigor el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, aprobado por el Gobierno con la autorización del Congreso de los Diputados, y en los días posteriores se aprobaron las primeras medidas sociales, que se han ido ampliando progresivamente al cabo de los días y de las semanas. Estas medidas han sido la respuesta inmediata para afrontar en nuestro país una pandemia que ha provocado un desastre en términos económicos y sociales en todo el mundo. Y, para ello, se ha movilizado una enorme cantidad de recursos públicos para reforzar la sanidad y los servicios sociales, y para proteger a trabajadoras y trabajadores, autónomas y autónomos y pymes, así como a las personas más vulnerables. El Escudo Social que el Gobierno ha decidido crear y seguir mejorando contiene un gran número de medidas laborales, de igualdad, de vivienda, de crédito, de alivio impositivo y de sostenimiento de la actividad económica de empresas afectadas y profesionales.

Al tiempo que se están tomando estas medidas, desde el estallido de la crisis del COVID-19 hemos comprobado que, en respuesta, las fuerzas reaccionarias, las empresas multinacionales y las élites, aquellas que no se presentan a las elecciones, están presionando para que se vuelvan a aplicar políticas similares a las de la crisis de 2008 a costa de los derechos de la gente trabajadora, al tiempo que vulneran sistemáticamente los derechos por la «vía de los hechos», precarizando las condiciones laborales, tratando de desahuciar a las inquilinas y los inquilinos de sus viviendas de forma ilegal, o amenazando con deslocalizar empresas y aplicar ERE masivos. Por todo ello, es clave profundizar en el empuje del movimiento popular para continuar con la articulación del trabajo comunitario, la defensa de los derechos y la labor de presión social para que sea la agenda social la que determine las políticas públicas frente a las fuerzas reaccionarias y al poder de las élites.

Reconstrucción de lo común: un reto como pueblo

No se conoce aún la magnitud ni la duración completa del impacto social y económico de la crisis del COVID-19, si bien ya ha generado numerosas consecuencias al conjunto de la población, con especial énfasis en aquellos sectores sociales que venían siendo afectados por la precariedad en sus múltiples formas, y en las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Este nuevo periodo hace imprescindible una gestión que vaya transitando desde la emergencia sanitaria hacia un proceso para poder recuperar las condiciones de vida dignas que nunca debimos perder.

Para ello, es fundamental llevar a cabo un proceso social de reconstrucción de lo común, que deberá abordarse desde una perspectiva plurinacional y popular, con el fin de asegurar la participación de las mayorías sociales. En este sentido, recogemos el «espíritu del 45», que fue el que permitió, tras la Segunda Guerra Mundial y durante la segunda mitad del siglo XX, recuperar los sistemas de bienestar en el conjunto de Europa. El «espíritu del 45» fue el origen de los derechos sociales, económicos y culturales, y consolidó en Europa las principales reivindicaciones que defendía la gente trabajadora, como la creación de un sistema nacional de salud, el desarrollo de un parque público de vivienda social o la garantía de los servicios públicos. Estos derechos tuvieron, además, un reconocimiento jurídico, que se plasmó en el constitucionalismo europeo que se aprobó en los años de posguerra.

Si bien gran parte de estos derechos se recogieron en la Constitución española de 1978, es fundamental que avancemos hacia mecanismos de exigibilidad de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, para que no sean una mera declaración de intenciones. Es necesario garantizar los derechos que nos permiten una vida en común, así como los derechos emergentes que está defendiendo el movimiento popular para el fortalecimiento de todos los servicios públicos en los ámbitos de educación, sanidad, vivienda y suministros básicos, cuidados, transporte y movilidad, igualdad, emergencias, justicia, diversidad funcional y medio ambiente, entre otros.

La crisis del COVID-19 señala que, más que nunca, debemos reconstruir lo común mediante una transformación del modelo económico actual hacia una economía de los cuidados que ponga en el centro la vida de las personas; un plan de choque contra la precariedad en todos los ámbitos que afecta de la vida; el fortalecimiento de todos los servicios públicos y un reforzamiento del sistema público sanitario; un sistema público de cuidados; una transición ecológica verde y sostenible, con capacidad de relocalizar e impulsar los sectores estratégicos en nuestro país; la profundización en las políticas de igualdad para poner fin a las violencias machistas y asegurar una igualdad efectiva; y el abordaje de la crisis climática, entre otras tantas medidas.

La reconstrucción de lo común es el principal reto que tenemos como pueblo, tanto a corto como a medio y a largo plazo, con las tareas inmediatas de recuperar derechos para asegurar unas condiciones de vida dignas, y con el objetivo estratégico de defender y profundizar las conquistas democráticas del pueblo.

Protagonismo popular en el proceso

Y todo lo anterior no va a ser garantía de éxito sin la participación de la gente en el proceso. En este sentido, tal y como señalamos en apartados anteriores, será fundamental la participación y cooperación de las Administraciones públicas, que deberán ponerse al servicio de los intereses de nuestro pueblo. Pero esto por sí solo no es suficiente. Para la reconstrucción de lo común serán necesarios tanto la participación popular como el reforzamiento del papel de las organizaciones y colectivos sociales durante el proceso.

El movimiento popular viene demostrando desde hace muchos años, con su práctica del hacer, que los derechos se defienden y se conquistan a través de la acción de nuestro pueblo. Ya hemos señalado las acciones llevadas a cabo por el movimiento popular durante esta crisis, si bien es primordial consolidar las redes de trabajo, tanto a nivel comunitario como en otras escalas más grandes, como garantía para la defensa de los derechos humanos.

El movimiento popular nos demuestra cada día que la mejor manera de decir es hacer, y por ello debemos poner en valor la cultura de la militancia entendida como el compromiso individual con el colectivo y con el pueblo, que se concreta en el trabajo militante por la justicia social. El papel de nuestra organización, como movimiento democrático y popular por la justicia social, será apostar por el fortalecimiento del movimiento popular, y por ello hacemos hincapié en la tesis señalada en el *Documento político*, en el objetivo de que sea la gente la que tenga la capacidad de determinar su propia vida por medio de la participación directa en el proceso político y social.

Espacio plural de las fuerzas del cambio al servicio del pueblo

A todo lo anterior se suma la amenaza constante de las fuerzas reaccionarias, que tratan de imponer una involución democrática a través del «pinocetismo 2.0», con prácticas muy parecidas en distintos países del mundo. Trump, Bolsonaro, Orbán, Salvini y VOX comparten el objetivo común de resquebrajar la democracia mediante un retroceso en derechos y allanar el terreno a las grandes corporaciones económicas y financieras.

Ante este escenario, es necesario llevar a cabo un reforzamiento de la organización y del conjunto de las fuerzas del cambio que componen el espacio plural, mediante prácticas que desplieguen la fraternidad y la sororidad popular. En este sentido, trabajaremos al servicio del pueblo y para la satisfacción de las necesidades de las mayorías sociales, mediante la articulación de derechos.

Nos reafirmamos en la necesidad de desplegar e impulsar el trabajo militante sobre el conjunto de los territorios, estableciendo sinergias entre el trabajo en lo social y las políticas públicas, bajo el compromiso de facilitar procesos sociales y de protagonismo popular para delinear horizontes de esperanza de la sociedad justa y solidaria a la que aspiramos.

ANEXO 2

La agenda renovada
de la política internacional
de Podemos

UN PAÍS
CONTIGO
PODEMOS

Mayo de 2020

PODEMOS

Contexto

El compromiso político de Podemos en la política global es claro: la transformación profunda del orden mundial existente hacia uno que se guíe por **el multilateralismo en la toma de decisiones globales, la soberanía de los pueblos y la democracia, las políticas de paz y la resolución dialogada de los conflictos, el principio de todos los derechos para todas las personas, la justicia económica global, el feminismo y la justicia ecológica.**

La pandemia mundial del COVID-19, que tanto ha sufrido nuestro país y que ha afectado a cerca de 150 países en todo el mundo, también está provocando grandes cambios adicionales en un panorama internacional convulso e incierto en, al menos, cinco grandes áreas:

- **Desorden geopolítico**, ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la crisis del petróleo en un sistema mundo en el que conviven varias arquitecturas del orden unipolar con la emergencia de nuevas potencias mundiales y más centros de poder regionales en disputa en muchas regiones del mundo. El sistema institucional de gobernanza multilateral encabezado por Naciones Unidas, cuestionado y paralizado por los enfrentamientos, ha sido dejado de lado por una creciente hiperbilateralización estatal y por el desplazamiento del derecho internacional y de los derechos humanos. Las políticas de la red reaccionaria internacional, fracasados sus intentos de agruparse de manera más orgánica, han llevado a potenciar los liderazgos de hombres fuertes en un rango que va desde políticas desdemocratizadoras a autoritarias, basadas en una recreación de sus naciones frente a los «otros» —personas refugiadas, migrantes, quienes no siguen la visión de sus países—, en la criminalización de la protesta... Y un mundo en el que hay muchos países con guerras, destrucción, expulsión de personas, violencia sexual, conflictos políticos...

- **Nueva crisis económica global, con tensiones globales versus locales y la necesidad de un nuevo Estado de bienestar**: cuestionamiento de los pilares de la actual globalización económica, tendencias a la renacionalización de las cadenas globales de valor de las grandes empresas multinacionales, aceleración de la modificación en las formas de trabajo y crisis de los cuidados. Esta crisis nos desvela el fracaso del neoliberalismo, de una economía financiarizada y sin control, de las privatizaciones y de la pérdida de control de sectores económicos clave. Los modelos de bienestar

probablemente pasarán por una construcción de un Estado de bienestar en el que, además de los pilares clásicos de seguridad social, educación y sanidad, se incluya un cuarto pilar vinculado a la protección en tiempos de precariedad colectiva o individual.

- **Nueva crisis de la Unión Europea.** El coronavirus ha vuelto a traer una crisis multidimensional a la Unión Europea tras la gran crisis económica de 2008 y el reparto desigual de sus consecuencias con las políticas de austeridad; así como tras la crisis de las personas refugiadas de 2015, en la que se reforzó el grupo de países de Visegrado y, en general, el eje de partidos y Gobiernos de extrema derecha. Nos encontramos en plena fase de propuestas económicas del Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Eurogrupo, que el Consejo Europeo está dirigiendo para la fase de emergencia sanitaria y para la que se anuncian planes de reconstrucción nacional.

- **Refuerzo de la salud como bien público global contra el modelo ultraliberal de la internacional reaccionaria.** El impacto geográfico desigual ha avanzado en su gravedad por distintos países, y las diferentes maneras de abordar el control de la pandemia no pueden ocultar que es necesaria una mirada mundial, justa y solidaria. Frente a la piratería de un mercado mundial sanitario, deslocalizado y en manos privadas, la heroicidad de los y las profesionales de la salud, junto con los y las trabajadoras (repartidores, cajeras, farmacéuticos...) y productores (personas dedicadas a la agricultura, la ganadería...) no puede ocultar la profundidad de la desprotección. La pandemia ha traído una nueva conciencia de comunidad global al afectar a todo el planeta, algo que, por desgracia, no sucedió con el sida o el ébola, pero también, a la vez, la existencia de apuestas por «mi país primero» podrían dañar una salida solidaria y justa a la crisis sanitaria con una vacunación universal.

- **Control social y guerrillas informativas.** En todo el mundo, el uso de la tecnología se está acelerando en dos direcciones. Por un lado, el aumento del prestigio de la videovigilancia, de aplicaciones de control de la ciudadanía infectada, de control de costumbres (compras, necesidades...). Este debate avanza sobre un precario equilibrio en el que los derechos a la privacidad y los derechos humanos ya están fragilizados y ahora pueden sufrir mucho más. Por otra parte, se ha incrementado el uso de medios de comunicación, fake news y redes sociales organizadas de bots con estrategias para sembrar división y odio, y azuzar miedos.

Propuestas

En este contexto, debemos repensar nuestro compromiso con la democracia internacional, precisamente, para mantenerlo y actualizarlo. No solamente para hacer frente a las nacientes crisis sanitarias, económicas y sociales derivadas del COVID-19, sino porque en un mundo en cambio, ahora más que nunca, hacen falta nuevos modelos internacionales. Los movimientos feministas y por el clima, cada vez más masivos a nivel internacional, continuarán sacudiendo conciencias y apuntando el camino que debemos recorrer. Es con ellos y con las organizaciones de la sociedad civil con quienes debemos trabajar para construir nuevas bases sociales, económicas y políticas que impulsen la esperanza de justicia social, democracia y libertad real que siempre han empujado a nuestra propia organización, guiados por los principios de soberanía de los pueblos y democracia, políticas de paz y resolución dialogada de los conflictos, todos los derechos para todas las personas, justicia económica global, feminismo y justicia ecológica.

Todos en común contra el COVID-19

La protección, el cuidado y la solidaridad entre personas, movimientos sociales, partidos políticos y pueblos son las mejores vacunas contra la barbarie y la reacción. La crisis del coronavirus nos obliga a buscar un mundo más cooperativo, multilateral, sin imposiciones de ningún país, basado en los derechos humanos y el derecho internacional. Exigimos que en estos momentos todos los recursos se centren en acabar con el COVID-19: con treguas en guerras y conflictos en el mundo, acabando con las sanciones comerciales, condonando las deudas externas de los países y fortaleciendo el sistema de gobernanza sanitario mundial con mecanismos comunes de investigación y producción de vacunas, así como de detección temprana y planes internacionales contra las pandemias.

El cambio político y social en Europa

Europa será social o no será. La pandemia del coronavirus ha traído un «momento de la verdad» a Europa. De esta crisis no podemos salir como (no) salimos de la anterior: creando desigualdad y clausurando los proyectos de vida de millones de personas en todo el continente. Es necesaria una respuesta común, porque este es un problema común del que no puede salir un solo país.

En solo dos meses, ya se ha hecho evidente que el proyecto cuenta con insuficiencias claras y con problemas estructurales que están haciendo que no pueda cumplir con los objetivos para los que nació y que, ahora más que nunca, son tan

necesarios. Estos objetivos están vinculados a la construcción del Estado de bienestar y de Europa como garantía de derechos para todas y todos: igualdad, trabajo digno, justicia social..., los objetivos que nos permiten ser verdaderamente ciudadanas y ciudadanos, es decir, ser verdaderamente libres.

Queremos una Unión Europea que ponga sus instituciones al servicio de las personas, no de los capitales financieros internacionales, que acabe con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que cambie el Estatuto del BCE para que esté al servicio de la creación de empleo y de la transformación ecológica, y que extienda los derechos sociales a todo el continente mediante políticas fiscales comunes, terminando con los paraísos fiscales, y que impida los actuales, e indecentes, niveles de desigualdad. El problema de la Unión es el diseño institucional y su gobernanza económica, que permiten paraísos fiscales y que dan un poder a los mercados financieros y a las grandes empresas que va a destruir la democracia. Las élites de los países que se oponen a las reformas solidarias en la Unión Europea saben que no pueden enfrentarse en solitario a los grandes problemas mundiales. Por esa razón, deben escuchar la petición de auxilio de los pueblos.

La recuperación del control de la economía

El actual orden económico internacional nos está aproximando, como planeta y como especie, al abismo. Los actuales niveles de desigualdad, el poder desmesurado que unos pocos multimillonarios acaparan ya han puesto en riesgo las democracias y amenazan con acabar con ellas. Cualquier avance progresista, en cualquier lugar del mundo, ha de ir acompañado de una propuesta de cambio en la economía internacional: acabar con el dominio de las finanzas sobre la economía real; recuperar la centralidad de lo público en la economía, lo que a nivel internacional implica el establecimiento de normas vinculantes para las grandes empresas y los grandes capitales; o a través de una política comercial que no esté guiada por el interés privado de un puñado de empresas, ni por la ceguera ideológica que asume que el libre comercio siempre es bueno. La ciudadanía debe recuperar el control de la economía desde los ámbitos más próximos a su vida. No tiene sentido económico y social el establecimiento de grandes cadenas de distribución y producción. Desde las políticas europeas y globales, se ha de potenciar la pervivencia de la vida en el campo, en las pequeñas ciudades y en los territorios a los que la actual economía globalizada está condenando a la periferia permanente. Hacen falta servicios públicos, intervención en los mercados y garantía de derechos para que el destino de zonas cada vez más amplias de nuestros países no sea el abandono. El otro ámbito clave del futuro orden económico global es el campo de la tecnología, la actual expansión de la inteligencia artificial y la explotación de datos. Hay que proteger los derechos civiles, políticos y sociales, y regular internacionalmente a las grandes empresas tecnológicas.

La defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina

De cómo se resuelvan los conflictos sociales y políticos que atraviesa actualmente América Latina dependerá el futuro de la región durante los próximos años. Ante la amenaza continua de golpes de Estado e injerencias externas, la interlocución y la cooperación con nuestras organizaciones hermanas en la región han sido y continuarán siendo prioritarias en nuestra agenda internacional. Asimismo, queremos contribuir con nuestras acciones e iniciativas a que España adopte un papel activo en la mediación de los conflictos y procesos de paz, así como de liderazgo en la defensa de los derechos humanos en la región, especialmente de las mujeres y de las defensoras y los defensores.

Una solución justa para Palestina

El plan que Estados Unidos e Israel pretenden imponer a Palestina, el llamado «Acuerdo del Siglo», no solo es un insulto al derecho internacional, sino que supone un enorme retroceso en la búsqueda de una solución pacífica y dialogada del conflicto y del fin de la ocupación, con gravísimas implicaciones para la población palestina. Es necesario seguir defendiendo el reconocimiento del Estado palestino. Es crucial seguir promoviendo el embargo militar a Israel por las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en la Franja de Gaza y tratar de impulsar una investigación internacional ante la posible comisión de crímenes de guerra por el asesinato de manifestantes pacíficos; promover normativas que prohíban de manera efectiva la importación de productos, bienes y servicios producidos en asentamientos ilegales o procedentes de ellos, según el derecho internacional y las Naciones Unidas; seguir impulsando que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) cuente con una financiación fija que le permita cumplir sus objetivos.

El apoyo a la libre determinación del Sáhara Occidental

Podemos ha estado desde su origen comprometido con el apoyo a la libre determinación del Sáhara Occidental, con quien España tiene una responsabilidad histórica. Es necesario apoyar el derecho a la libre determinación del pueblo saharauí y la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de negociación en marcha.

Una relación de igual a igual con África y Asia

Una relación igualitaria, de mutuo beneficio y con respeto a los derechos humanos con los países de África es la mejor manera de superar un pasado de colonialismo y crear un futuro digno para uno y otro continente, superando las políticas centradas en

la contención de la migración, la securitización de fronteras y la extracción de recursos naturales. Proponer con Asia, donde toma relevancia China como centro de la geopolítica mundial, un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y respetuosas con los derechos humanos y los compromisos internacionales en materia de medio ambiente y derechos laborales. Asimismo, hay que impulsar una estrecha cooperación en asuntos de paz y emergencia climática.

Una política exterior feminista

La oleada feminista que recorre el mundo actualmente, particularmente en los países de América Latina y Europa, nos marca la necesidad y abre una oportunidad para encarar las relaciones internacionales y los desafíos globales con una estrategia basada en un enfoque feminista e interseccional, en el que la vida y los cuidados ocupen el centro, y se priorice la igualdad real de las mujeres y la libertad para ejercer sus derechos y vivir sus vidas libres de violencia.

La lucha contra la emergencia climática y el cambio en el modelo productivo

La crisis ecológica a la que el actual modelo de desarrollo depredador e insostenible nos ha traído no tiene vuelta atrás. Es necesario implementar políticas globales que cuestionen el actual modelo de desarrollo y, sobre todo, los intereses que lo sostienen, que no son otros que los de las grandes empresas multinacionales, con un enfoque de transición justa, que proteja a los más vulnerables, en el que quien más contamina más sacrificios y más costes asuma.

La paz y el desarme

La carrera armamentística es actualmente la principal amenaza para la paz en el mundo. Debemos trabajar por la construcción de un orden internacional pacífico en el que España destaque por su papel activo en la búsqueda de soluciones dialogadas a los conflictos y por su apoyo político y financiero a los procesos actuales de paz; colaborar en los trabajos internacionales por el desarme y la cooperación; apoyar el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), la auditoría de la aplicación de ley española de comercio de armas y la revocación de compromisos en materia de aumento del presupuesto militar. Es necesario construir un nuevo esquema de seguridad colectiva para Europa que supere el actual paraguas de la OTAN y que esté basado en los intereses de nuestra región.